

Santiago, diez de diciembre de dos mil veintiuno.

Vistos y considerando:

Primero: Que de conformidad con lo dispuesto en el artículo 782 del Código de Procedimiento Civil, se ordenó dar cuenta del recurso de casación en el fondo deducido por la denunciada en contra de la sentencia dictada por la Corte de Apelaciones de Concepción, en cuanto confirmó la de primera instancia que, en lo que interesa, acogió la denuncia por infracción a la Ley de Pesca y Acuicultura y la condenó al pago de una multa equivalente a 3 Unidades Tributarias Mensuales por entregar información estadística pesquera oficial no fidedigna.

Segundo: Que la recurrente denuncia vulnerados los artículos 125 números 1 y 4 de la Ley de Pesca y Acuicultura, 15 del Decreto Supremo N°129, de 2013, y 19 N°3 de la Constitución Política de la República, por cuanto la sentencia no realiza un acabado examen de la prueba rendida, la cual demuestra el proceso de comercialización de los productos capturados, incurriendo en infracción a los principios de la lógica y las máximas de la experiencia, pues de la documental rendida se puede apreciar que los desembarques declarados efectivamente se realizaron y los productos capturados fueron procesados y comercializados. Expresa que la infracción cometida se encuentra tipificada en el artículo 63 letra b) de la Ley General de Pesca y Acuicultura, y, conforme a la prueba rendida, ha quedado claro que no ha cometido la infracción que se le imputa y la prueba del denunciante se trata de un simple cruce documental junto a la declaración de un testigo que no es un tercero ajeno al juicio, lo que no permite acreditar en forma suficiente la infracción denunciada. Manifiesta en cuanto a la infracción al artículo 15 del Decreto Supremo N°129, de 2013, que su representada ha cumplido a cabalidad con las exigencias legales y reglamentarias del caso, como se demostró, y de lo cual el tribunal no se hace cargo. Con todo, la presunción establecida en el artículo 125 N°1 de la citada ley, es de carácter simplemente legal, a lo que se debe tener en consideración que la denuncia se funda en una simple conclusión y no en una constatación, no existiendo un respaldo científico ni técnico para que se pueda afirmar lo que refiere, no encontrándose, entonces, revestida de la presunción de veracidad. Asimismo, no existe un fundamento para justificar el actuar de la denunciada, en el sentido de declarar más de lo efectivamente capturado, lo que ni siquiera se expresa en la denuncia. Finalmente, alega una diferencia injustificada respecto de la fuerza probatoria consagrada a nivel legal de los medios de prueba que tiene y tuvo a disposición SERNAPESCA, en comparación a la fuerza probatoria a nivel legal de



los medios de prueba que dispone y dispuso el pescador artesanal, vulnerando la garantía del debido proceso, ya que el alcance que le da el fallo a la presunción de veracidad del artículo 125 N°1 de la Ley General de Pesca, es contraria a una investigación y procedimiento racional y justo; razones por las que solicita la invalidación del fallo y se dicte el de reemplazo de carácter absolutorio.

Tercero: Que en la sentencia se establecieron los siguientes hechos:

- 1.- Entre los días 31 de mayo y 1 de junio de 2018, don Marcelo Edgardo Astete González, en su calidad de armador de la embarcación bote motor “Cazador V”, matrícula N°1393 de Lebu, inscripción en el Registro Pesquero Artesanal (RPA) N°956010 de Lebu, efectuó cuatro declaraciones de desembarque artesanal del recurso jibia o calamar rojo en la caleta de Tubul, que no son fidedignos, debido a que no fueron efectivamente realizados, según se desprende de la revisión y contraste de las declaraciones estadísticas con la información de zarpe y recalada que posee la Capitanía de Puerto de Armada de Chile, remitida al Servicio Nacional de Pesca mediante anexo “A” de Ordinario 12.600/50/2018, de fecha 25 de junio de 2018, emanado del Capitán de Puerto de Lota.
- 2.- La embarcación bote a motor “Cazador V” es un bote menor, que tiene matrícula 1393 de Lebu, registro de la nave N°956010, siendo su armador don Marcelo Edgardo Astete González.
- 3.- La embarcación “Cazador V” no registra zarpes desde el 26 de abril de 2019 al 25 de junio de 2019, en Capitanías de Puerto, lo que no coincide con lo declarado por el denunciado, quien efectuó cuatro declaraciones de desembarque artesanal del recurso jibia o calamar rojo en las caletas de Tubul.

Sobre la base de los hechos establecidos, la judicatura del fondo tuvo por acreditados los hechos constitutivos de la infracción, luego de valorar la prueba rendida de acuerdo con las reglas de la sana crítica, para lo cual tuvo en consideración que la aportada por el denunciante emana de instituciones imparciales, que, por esta circunstancia, gozan de mayor credibilidad, lo que además concuerda con lo declarado por el Inspector del Servicio Nacional de Pesca don Jorge Romero Saavedra, quien realizó el análisis documental que dio origen a la denuncia, en su calidad de inspector, afianzando la presunción del artículo 125 N°1 párrafo final. Asimismo, y respecto a la prueba rendida por el denunciado, el tribunal tuvo en consideración que el reporte de desembarques y las guías de despacho aportadas no son idóneas para acreditar que se efectuaron, ya que, contrastada con la información del servicio, no concuerdan las



toneladas o kilos declarados por la embarcación con los indicados en las guías de despacho, además de aludir solo a la comercialización del recurso hidrobiológico y, aún de haberse vendido el producto a una empresa del rubro, esta circunstancia por sí sola no desvirtúa el hecho de que los desembarques que dieron origen a la denuncia no fueron realizados. Haciéndose cargo de la alegación relativa al perjuicio, expresan que la normativa no exige un daño al ecosistema marino o al recurso en estudio dentro del tipo objetivo, ya que el bien jurídico protegido es la fe pública, que, en la especie, fue quebrantada por el denunciado.

Cuarto: Que de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 125 número 4 de la Ley de Pesca y Acuicultura, la prueba aportada por las partes será apreciada por la judicatura de la instancia según el sistema de la sana crítica, esto es, conforme a las normas de la lógica, los principios científicos afianzados y las máximas de la experiencia, y si bien es soberana para determinar los hechos asentados conforme a ella, no procede aceptar que en tal análisis se prescinda de los elementos de convicción que están llamados a valorar o que se releve a uno de los litigantes de la carga probatoria, concluyéndose, de esta forma, que el legislador estableció un sistema particular de ponderación para esta clase de procedimientos, con exclusión de cualquier otro, como el reglado que se contiene en el Código de Procedimiento Civil, que no tiene aplicación, salvo por la remisión expresa que efectúa el número 18 de esa disposición.

Quinto: Que, tal como se indicó, la decisión de la judicatura del fondo se sostuvo no sólo en la denuncia formulada por el servicio, sino que, además, en la ponderación de los elementos de cargo que presentó, de carácter documental y testimonial, incluidas, por cierto, las aserciones del inspector del Servicio Nacional de Pesca que realizó el cruce documental, contenida en la denuncia y que fue narrada por el fiscalizador en la audiencia de prueba, cuyos dichos no fueron desvirtuados por la prueba rendida en contrario, configurándose, de esta forma, la convicción del tribunal, conjunto que fue ponderado según las reglas señaladas y que permitieron colegir la efectividad de los hechos imputados.

Sexto: Que, en consecuencia, se puede concluir que los tribunales de la instancia dieron cumplimiento a las reglas probatorias denunciadas, desde que se impuso al servicio la carga de acreditar los hechos contenidos en la denuncia y a la denunciada aquellos que la exoneraban de los cargos formulados, propósito que intentó efectuar a través de las alegaciones desarrolladas en el recurso, aunque sin éxito, ya que el convencimiento alcanzado en la instancia, como se



indicó, se produjo a partir de un conjunto de antecedentes y de determinadas presunciones obtenidas a partir del análisis de la documental y testimonial rendidas, cuya procedencia, como esta Corte ha sostenido, no es un aspecto susceptible de control en sede de casación en el fondo, por cuanto exige un ejercicio valorativo propio y exclusivo del fondo, que impide alterar las conclusiones fácticas determinadas en el fallo impugnado.

Séptimo: Que sobre la base de los hechos establecidos en la instancia de manera inalterable y los razonamientos desarrollados, se debe concluir que la decisión condenatoria fue producto de la correcta aplicación de la legislación sancionatoria atinente a la materia, sin que concurren las vulneraciones acusadas en el recurso, razón por la que se debe desestimar el intentado en esta etapa procesal por adolecer de manifiesta falta de fundamento.

Por estas consideraciones y normas citadas, **se rechaza** el recurso de casación en el fondo deducido contra la sentencia de trece de septiembre de dos mil veintiuno.

Regístrese y devuélvase.

N°78762-2021.-



Pronunciado por la Cuarta Sala de la Corte Suprema integrada por Ministra Gloria Chevesich R., Los Ministros (As) Suplentes Mario René Gómez M., Roberto Ignacio Contreras O. y los Abogados (as) Integrantes Maria Gajardo H., Gonzalo Enrique Ruz L. Santiago, diez de diciembre de dos mil veintiuno.

En Santiago, a diez de diciembre de dos mil veintiuno, se incluyó en el Estado Diario la resolución precedente.

